

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE TRÁMITE Y FALLO

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, se constituyó en audiencia, con el fin de resolver el recurso de apelación y la consulta de la sentencia proferida en primera instancia en el proceso ordinario laboral promovido por **ANTONIO GIL PALACIOS PALACIOS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A.** (en adelante COLFONDOS S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-014-2018-00264.

AUTO

Se observa a folio 183, escrito mediante el cual, el abogado FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, invocando su calidad de representante legal de la firma de abogados PALACIO CONSULTORES S.A.S. presenta poder para actuar en este proceso en representación de COLPENSIONES y a su vez sustituye el poder a la abogada ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ RESTREPO.

Revisado el expediente, se halla copia de la escritura pública No. 716 de 15 de julio de 2020, a través de la cual COLPENSIONES le confiere poder especial a la referida sociedad para actuar como apoderado judicial en procesos en su contra, fl. 184

En atención a lo anterior, se le confiere personería para representar los intereses de la entidad a la firma de abogados PALACIO CONSULTORES S.A.S, como apoderada principal y a la abogada ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ RESTREPO, portadora de la TP. 190.428 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones y se condene a COLFONDOS S.A., al pago de los perjuicios morales causados por el traslado de régimen pensional.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones relata el actor que se afilió en noviembre de 1986 al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (en adelante ISS) hoy COLPENSIONES, y posteriormente se afilió a COLFONDOS S.A.

Afirma, que el asesor de COLFONDOS S.A., al momento de la afiliación le aseguró que el ISS iba a desaparecer, que se corría el riesgo de que perdiera sus aportes y que en el fondo privado se pensionaría a una menor edad y con un mayor valor. Indica que COLFONDOS S.A. no le brindó la información completa y no le explicó la diferencia de los aportes, las modalidades de pensión, la forma de redención del bono pensional y de pensión anticipada ni voluntaria.

Señala que se encuentra inmerso en una crisis emocional por la incertidumbre de su derecho pensional, lo que le ha ocasionado tristezas, depresiones, preocupaciones y temores por el aplazamiento de su pensión.

Afirma que desde el 15 de febrero de 2018 buscó regresar al RPM, pero se le negó por estar a menos de 10 años de cumplir la edad pensional.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS y condenando en consecuencia a la AFP COLFONDOS S.A. a trasladar a Colpensiones todos los valores de la cuenta de ahorro individual del actor, incluidos los intereses y frutos, cuotas de

administración y a Colpensiones a recibir dichos dineros y a reactivar la afiliación de la demandante en el RPM, además, decidió negar los perjuicios pretendidos.

Para fulminar la condena el *a quo* argumentó que existe precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que cuando hay deficiencia en la información suministrada al momento de la afiliación se produce la ineficacia de la afiliación, por lo que es obligación brindar la información suficiente sobre las características, ventajas y desventajas de los regímenes pensionales. <indicó además que tienen la carga de probar la información proporcionada al momento de la afiliación.

Luego concluyó que la AFP COLFONDOS S.A., no cumplió con su carga probatoria de demostrar la información brindada al momento de la afiliación, es decir que fue clara, completa y oportuna.

Así, el juez, decidió ordenar el traslado de la totalidad de los dineros contenidos en la cuenta de ahorro individual de la demandante y los rendimientos con las correspondientes cuotas de administración.

En cuanto a la pretensión de indemnización de perjuicios peticionada por el actor argumentó el *a quo*, que no se probaron en el proceso tal perjuicio.

Finalmente consideró que la acción de traslado de régimen es imprescriptible por estar íntimamente ligado al derecho a la pensión y condenó en costas procesales a COLFONDOS S.A por haber omitido esta administradora información al momento de la afiliación del actor.

3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN.

El apoderado del demandante apela la decisión de primera instancia indicando que no comparte la decisión del *a quo* por cuanto considera que la orden de traslado de dineros y rendimientos también debe contener las sumas adicionales de la aseguradora y los gastos por FOGAFIN.

Que en cuanto a las costas procesales, solicita se condene al pago de ellas también a COLPENSIONES pues la entidad se opuso a las pretensiones de la demandada y propuso excepciones, además se imponen a quien resulte vencido en el proceso.

Que en relación con los perjuicios, está probada su causación pues la demandante ya superó la edad para pensionarse en el RPM, demostrándose los perjuicios con la prueba de la edad y las semanas, que tuvo que contratar a un abogado para demandar el traslado de régimen, está perdiendo además un retroactivo pensional y está cotizando aun porque así lo exige el sistema.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial del demandante presentó oportunamente escrito de alegaciones, en los siguientes términos:

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

“El actor argumenta resumidamente en os alegatos que insiste en que se confirme la sentencia apelada toda vez que quedó probado que el fondo privado no brindó la información que su deber le imponía al momento de suscribir el formulario de afiliación.

Que la ley 100 de 1993, introdujo innumerables cambios en materia de seguridad social en nuestro país, y por esta razón, la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el I.S.S. o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100 de 1993, de trasladarse al RAIS, exige que la persona tenga absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, los efectos que en su caso se generarán si toma la decisión de trasladarse.

Que en ese sentido, la responsabilidad de la Administradora de Pensiones radica, no solo en informar de manera sucinta las características del nuevo régimen, sino que va más allá, pues antes de que el ciudadano diligencie y suscriba el formulario mediante el cual se concreta la afiliación o el traslado, debe dar asesoría personalizada, analizar el caso concreto de la persona, identificando minuciosamente varios aspectos, como, por ejemplo:

- Cuál es su régimen para saber los requisitos de EDAD, TIEMPO Y MONTO de la pensión de vejez en caso de quedarse en el Régimen de Prima Media.
- Cuál es la situación del BONO PENSIONAL de la persona y si en caso de

trasladarse al RAIS, atendiendo a su monto y al de sus IBC, efectivamente podrá pensionarse anticipadamente como se anuncia en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, o no.

- Si en razón de sus ingresos y el valor del BONO PENSIONAL, la persona realmente no podrá pensionarse anticipadamente o por el contrario, deberá continuar cotizando hasta los 57 o 62 años de edad y completar 1150 semanas para poder acceder a la garantía de pensión mínima.
- Si a pesar de completar estos requisitos que en principio le permiten acceder a la garantía de pensión mínima, la persona está incurso en la excepción consagrada en el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, con el efecto perverso de que en caso de que así sea, sólo podrá obtener la DEVOLUCIÓN DE SALDOS y quedar sin pensión, con la consecuencia relacionada con la afiliación al sistema de seguridad social en salud.

Que las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento se traducen en INEXISTENCIA DEL TRASLADO, pues el ciudadano prevalido de buena fe y confiando legítimamente en que está tomando la mejor decisión para él, suscribe el documento víctima de un engaño, sujeto a un ERROR derivado del conjunto de acciones u omisiones en que incurrió la entidad de pensiones a través de los profesionales que intervinieron en la asesoría, y ésta sola circunstancia genera la declaratoria de INEXISTENCIA del acto jurídico de afiliación o traslado, según sea el caso.

Que en razón de la RESPONSABILIDAD PROFESIONAL de la entidad, del DEBER DE INFORMACIÓN COMPLETA y de la ESPECIAL DILIGENCIA con que debe actuar, atendiendo a la importancia de la “**decisión de vida**” que toma la persona al confiar en que la propuesta de afiliación o traslado es lo mejor para ella, **SE INVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA DEL DEMANDANTE EN LA ENTIDAD**, de manera que dentro del proceso debe ser ésta quién acredite el haber cumplido con las obligaciones constitucionales y legales que le incumbían en esta fase previa a la toma de decisión en materia de afiliación o traslado.

Que en el caso concreto la parte demandante demostró que la entidad demandada no cumplió con su obligación de ofrecer una asesoría en los términos indicados.

Que a la demandante al momento de la afiliación al RAIS, no se le realizó ni cálculo, ni proyección alguna, a pesar de contar los fondos privados, con todos los

aspectos técnicos, matemáticos y financieros, para realizar la proyección de sus diferentes factores, tales como: su pensión para la fecha de cumplimiento de su edad, pensión anticipada, la redención del bono pensional, saldo que debía acreditar en su cuenta, entre otros. Incurriendo el fondo privado en una omisión en su deber legal y Constitucional; generándole un daño patrimonial y moral.

Si a la demandante desde el momento de la afiliación hubiese conocido situaciones, tales como, que existe la posibilidad de no pensionarse anticipadamente, que su pensión anticipada, está condicionada a unos requisitos, que su bono pensional perdería poder adquisitivo si se hacía efectivo antes de tiempo, de que no se pensionaría por semanas, sino por capital, que su monto pensional podría ser inferior a la edad establecida en el RPMPD, jamás hubiese firmado el documento de traslado de fondo, que en la actualidad no le está generando sino perjuicios emocionales, físicos y económicos, tales como: tristezas frecuentes, depresiones, preocupaciones, temores por el aplazamiento de su reconocimiento pensional, déficit en su mesada pensional, respectivamente.

Por todo lo anterior, solicito se confirme la decisión y se ordene devolver de los dineros de la parte demandante con dirección a COLPENSIONES, pague de su patrimonio los dineros que por concepto de los descuentos del artículo 20 Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003 fueron extraídos de cada una de las cotizaciones realizadas por la actora, dineros que tenían como fin el pago del Fondo de garantía de pensión mínima, gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. Todo lo anterior debidamente indexado.

Igualmente, solicito se condene en costas a todos los demandados por cuanto fueron vencidos en el proceso.”

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al régimen pensional de ahorro Individual con solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones, se debe realizar, el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Además, se decidirá si es jurídicamente viable condena contra COLFONDOS S.A., por perjuicios morales que haya irrogados al demandante o por perjuicios materiales.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en los Art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de las partes, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversas, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Para resolver la consulta en favor de COLPENSIONES, es necesario manifestar, primeramente, que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, pues el traslado se produjo el 28 de noviembre de 1994 (fol. 18) que el traslado de régimen pensional debe partir de la completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias

SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el pasado 8 de mayo de 2019, en la que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente caso, está probado, que la accionante. estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, como se acredita con el reporte de semanas cotizadas que obra en el CD de folios 78 del plenario, decidió trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLFONDOS S.A., el día 28 de noviembre de 1994, conforme al formulario de afiliación de folios 18.

De otra parte, en este caso, si bien el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 40 o más años, contrario a lo afirmado por la recurrente, ello no es óbice para que la AFP COLFONDOS S.A. en el año 1994 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de que dependería su monto.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 1:17:21 del CD que milita a folio 181 y que contiene la audiencia de trámite y juzgamiento, no se advierte que haya confesado que la AFP COLFONDOS S.A. le haya brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su traslado al RAIS, y si bien señala que se le explicaron aspecto como la heredabilidad del dinero contenido en la cuenta de ahorro individual, esta información no es suficiente para considerar que la demandante fue suficientemente informada al momento del traslado, pues hay otros aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, la distribución de los aportes en el RAIS, la forma de redención del bono pensional, las diferentes modalidades pensionales entre otros aspectos que resultan necesario para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se prueba que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado.

Conforme los argumentos de hecho y derecho expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora y ordenó la reactivación de su afiliación en el RPM.

Ahora, referente a las sumas que deben ser devueltas a COLPENSIONES por parte de COLFONDOS S.A., punto que fue objeto de apelación por el apoderado de esta entidad, encuentra la Sala que la orden impartida por el *a quo*, de trasladar a Colpensiones todos los valores de la cuenta de ahorro individual del actor incluidos los rendimientos y gastos de administración, se ajusta a derecho, y deberá ADICIONARSE en cuanto a que dicha devolución debe incluir, la totalidad de los aportes pensionales que hubiera recibido COLFONDOS S.A. a favor del demandante, incluidos, como lo solicita el demandante en su apelación, las sumas adicionales de la aseguradora, porcentajes destinados a FOGAFIN, es decir el 100% de la cotización, sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese

existido el acto de afiliación, es decir ningún efecto jurídico puede derivarse de este, sin importar que la AFP haya generado rendimientos de los aportes efectuados, y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, pues como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando que la Sala Civil de la alta Corporación, igualmente ha afirmado que: **«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»** (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008, reiterada en sentencias SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019, en esta última precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Así las cosas, al haberse declarado la ineficacia de la afiliación, deberán devolverse la totalidad de los dineros aportados, pues estos recursos, desde el nacimiento del

acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, por lo que la sentencia de primera instancia será ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por Colpensiones, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la SCL de la CSJ en la sentencia SL1689-2019, proferida el pasado 8 de mayo de 2019 con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Finalmente, en cuanto a los perjuicios solicitado por el recurrente, ha de señalarse primeramente que el daño moral ha sido entendido como la tristeza, depresión, desolación, angustia, zozobra, congoja y otras afecciones que sufren los seres humanos cuando ven disminuido su bienestar en esfera espiritual o afectiva, por causa de un acontecimiento que los ha perjudicado.

Es de precisar, que quien pretenda el resarcimiento de un daño moral como el que se depreca en la demanda, deberá acreditar en cada caso, en primer lugar, la existencia del daño causado con la acción u omisión del sujeto pasivo de la pretensión, así como la relación de causalidad entre la conducta endilgada al demandado y el daño acaecido.

En este caso el apoderado de la parte demandante arguye en el recurso de apelación que los perjuicios solicitados están probados, aduciendo para el efecto que la demandante superó la edad para pensionarse en el RPM, que cumple con las semanas, que tuvo que contratar a un abogado para demandar el traslado de régimen, que está perdiendo un retroactivo pensional y que continuó cotizando porque así lo exige el sistema. Estos argumentos en los que finca su apelación, a juicio de la Sala, no son conducentes para fundar la existencia de unos perjuicios morales, pues no se dirigen a poner de presente al tribunal que en el proceso se haya probado de qué manera se afectó a la demandante en las esferas de su vida, familiar, personal o en el trabajo, es decir, para alegar que el daño moral se consolidó y generó los perjuicios que pretende en esta acción.

De los argumentos propuestos se colige que pretende se tengan como demostrados perjuicios materiales, como lo es por ejemplo que ya no puede acceder a un

retroactivo pensional, es decir, se refiere a situaciones económicas que se pudieron haber menoscabado con el traslado y, teniendo en cuenta que lo solicitado en la demandada fueron los perjuicios morales no puede esta Colegiatura en esta instancia definir si se le causaron y se probaron a la demandante perjuicios materiales, porque, en la demanda, no se alegaron ni pretendieron y en consecuencia se vulneraría al principio de congruencia que debe existir entre la demanda y la sentencia, el cual impone a la autoridad judicial el deber de resolver el litigio con sujeción a los hechos y a las pretensiones, por lo tanto se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió de los perjuicios morales pretendidos.

En relación con la absolución de las COSTAS procesales a COLPENSIONES, que pretende la parte demandante se revoque, debe decirse que conforme a las preceptivas del Nro 5 del art. 365 del CGP que establece que: *“En caso que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial expresando los fundamentos de su decisión.”*, en este caso, en atención a que esta entidad no tuvo ninguna responsabilidad o injerencia en el traslado de régimen pensional del demandante puesto que no era su obligación prestar la información debida al momento de la afiliación al RAIS y por lo tanto su convocatoria al proceso fue solo para que corrieran con las consecuencias de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en el que no participaron, no tiene que asumir costas procesales.

De acuerdo con lo anterior se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió de costas procesales a COLPENSIONES, quedando dicha condena únicamente a cargo de PROTECCIÓN S.A. por haber resultado vencida en el juicio y por haber sido esta sociedad la que con su actuar generó la ineficacia declarada.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se confirmará y adicionará, la sentencia apelada y consultada.

Sin costas en esta instancia, por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación a favor de la parte demandante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2019 proferida por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por **ANTONIO GIL PALACIOS PALACIOS** contra la **AFP COLFONDOS S.A.** ADICIONÁNDOLA en el sentido de indicar que la devolución de dineros a **COLPENSIONES** por parte de **COLFONDOS S.A.**, debe incluir no solo el saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la actora con sus intereses, cuotas de administración sino también las sumas adicionales de la aseguradora, porcentajes destinados a FOGAFIN que haya descontado de la cotización del demandante, es decir, el 100% de la cotización, sin descuento de ninguna índole.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

La anterior se notifica a las partes en ESTADOS.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

FRANCISCO ARANGO TORRES

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **073** del **30 DE ABRIL DE 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a4d5c284ca53a599b8f4b3368bc6808d57fd96e29463f2d70ee74e23b4b135c**

Documento generado en 29/04/2021 10:27:40 AM